

Pedimento del C. Procurador general de la Nación.

El Procurador general interino dice: que en el Juzgado de Distrito del Estado de Veracruz á 12 de Noviembre de 1872, se inició el presente juicio de comiso contra D. E. Ringel Junior, por suplantacion en calidad de una caja marca P. V. P. con ochocientos metros, declarados como tejidos de algodón y seda, segun la hoja de despacho número 21 del vapor inglés "Jamaican," entrado en ese puerto en 14 de Octubre de 1872.

Colabrada la junta de ley, y oído el parecer de los peritos que se nombraron para la calificación de dichos tejidos, el expresado Juzgado de Distrito, á 29 de Enero del corriente año, sentenció á D. E. Ringel Junior, á pagar dobles derechos por los tejidos de la caja, cuyo despacho pidió en 21 de Octubre de 1872, declarando que los derechos que deben pagar dichos tejidos son los señalados en el número 220 del artículo 18 del arancel vigente.

Esta sentencia fué apelada por parte de E. Ringel Junior, y sustanciado conforme á derecho el recurso que fué aducido en virtud de que el Administrador de la Aduana declaró, que la materia del juicio excedía de quinientos pesos, el Tribunal de Circuito de Puebla, por sentencia de 9 de Mayo próximo pasado, confirmó la del inferior en la parte que condena al apelante al pago de dobles derechos y la revocó en la declaracion que hace, de que los derechos deben pagarse segun el número 220 del artículo 18 del arancel vigente, previniendo sobre esto, que conforme á lo prevenido por el artículo 21 del repetido arancel, se procederá al aforo de la caja marcada P. V. P. á fin de que sus derechos se paguen á razon de un cincuenta y cinco por ciento como allí se dispone. Notificada esta sentencia, fué consentida por todos los interesados.

El que suscribe, considerando arreglada á derecho esta determinacion, que causó

ejecutoria conforme á los artículos 151, 152 y 153 del arancel vigente, y no encontrando mérito para exigir la responsabilidad á los jueces que intervinieron en este proceso, pide á la Sala se sirva darlo por revisado.

México, 18 de Junio de 1874.—*García Ramírez.*

Auto de revision de la Suprema Corte de Justicia.

México, 18 de Junio de 1874.—Por revisado y no apareciendo mérito para la responsabilidad, devuélvase las actuaciones y archívese á su vez el Toca.—*José María Iglesias.*—*Miguel Auza.*—*Juan J. de la Garza.*—*Ignacio María Altamirano.*—*Simon Guzman.*—*Enrique Landa,* secretario.

Es copia que certifico. México, 25 de Junio de 1874.—*Alejo Gomez Reguarte,* oficial segundo.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Tamaulipas por Doña Trinidad del Castillo de Fernandez, contra el decreto número 72 de la Legislatura del Estado, de fecha 24 de Setiembre del año pasado, y su reglamento expedido por el Ejecutivo en 4 de Octubre del mismo año, que sin causa de utilidad pública, y sin concederle previa indemnizacion, la expropiian de una parte de los terrenos de la hacienda de San Lorenzo.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

Desde su anterior pedimento, el suscrito expresó la sospecha de que no habia nove-

cientos individuos que solicitasen erigir en Villa la hacienda de San Lorenzo, propiedad de la Sra. Doña Trinidad Castillo de Fernandez, agregando, que aún en caso de haber ese número de solicitantes, le parecía injusto expropiar á dicha Señora, violándose con ese acto la garantía de que habla el artículo 27 de la Constitución.

Hoy resulta de todo lo actuado en el término de prueba, que no sólo no hay tales novecientos vecinos de la proyectada Villa, sino que de los pocos que al principio pedían la erección de esta, mas de la mitad ha protestado, diciendo que por sorpresa se les hizo firmar el escrito que con aquel objeto se presentó al Gobierno del Estado. En consecuencia, adquieren mucha mayor fuerza todas las razones que el suscrito expuso en su pedimento de 30 de Diciembre próximo pasado.

En mérito de ellas, y aun prescindiendo de alguna otra que pudiera aducirse, como v. g. la de haberse decretado ejidos para la proyectada Villa á pesar de que esta cuando mas debiera tener lo que se llama "fundo legal," el fiscal repite á V. su súplica de que ampare y proteja á la mencionada Sra. Fernandez, contra los actos de la Legislatura y Gobierno del Estado, en virtud de los cuales se la quiere expropiar de un terreno de su propiedad.

Tampico, 17 de Abril de 1874.—
Lic. Modesto Ortiz.

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Tampico, 4 de Mayo de 1874.—Visto el presente juicio de amparo promovido por Doña Trinidad del Castillo de Fernandez, contra el decreto número 72 de la H. Legislatura del Estado, expedido en 24 de Setiembre de 1873, y reglamento del Ejecutivo de 4 de Octubre del mismo año, por considerar que tales disposiciones en virtud de las cuales se le expropia de una parte de los terrenos de su hacienda de San Loren-

zo, sin causa de utilidad pública, ni de indemnización previa, viola en su persona la garantía otorgada por el artículo 27 de la Constitución federal, á los habitantes de la República. El informe del C. Gobernador acompañado de algunos documentos por vía de justificación; las pruebas producidas yá, por D. Manuel Rodríguez en calidad de apoderado de la quejosa; lo pedido por el C. Promotor en favor de la procedencia del amparo, y las demás constancias de autos.

Considerando en cuanto al decreto número 72; primero: que en ninguno de sus artículos, manda que preceda la indemnización al acto de la expropiación; pues el artículo 29 exige únicamente sea previo el nombramiento de peritos.

Segundo: que conferido al Congreso general por el artículo 27 de la Constitución, la facultad de designar la autoridad que deba hacer la expropiación, y establecer los requisitos con que haya de verificarse, es necesario que dicho cuerpo expida la ley reglamentaria, para poderse saber con certeza cuales son los casos de utilidad pública, cuales los de necesidad, que autoridad en cada Estado debe decretar la expropiación, y que requisitos ha de llenar antes de verificarla; pero partiendo siempre de la base ya asentada en el precepto constitucional, de que había indemnización ó indemnización previa.

Tercero: que mientras esa ley reglamentaria no haya sido expedida, la Legislatura de un Estado, sin invadir facultades que no le han sido conferidas, no puede dar decretos de expropiación, sino en casos muy limitados, cuando la necesidad sea grave, ó la utilidad notoria, y aun entonces supliendo abundantemente los requisitos que la ley no ha señalado todavía.

Cuarto: que en el caso presente, además de no haberse decretado la indemnización previa, la utilidad pública que resulta de la expropiación, es cuando menos cuestionable, porque los mismos vecinos de la congregación de San Lorenzo, que deberían ser los

mas inmediatamente beneficiados, están divididos en sus opiniones, juzgando unos que la erección de la Villa les aprovecha, mientras otros sostienen lo contrario; porque el H. Consejo dió dictámen favorable á la expropiación y el ingeniero C. Manuel María Canscco, comisionado del Gobierno, emitió un parecer opuesto; porque la H. Legislatura ha fluctuado entre esos dos encontrados pareceres, dando primero, en acuerdo de 27 de Junio de 1873, una resolución negando la expropiación, y otra opuesta en el decreto número 72; porque las razones expuestas por el H. Consejo para inclinar el ánimo del C. Gobernador en favor de dicha expropiación, son muy débiles, y algunas contienen principios esencialmente anticonstitucionales; porque la H. Legislatura revocó su primer acuerdo, en virtud de las observaciones del Ejecutivo, basadas en la facultad que le otorga la fracción V del artículo 74 de la Constitución particular del Estado, y esta facultad no existe, por ser contrario al precepto contenido en el artículo 27 de la Constitución general, según el cual, corresponde al Congreso de la Union designar la autoridad que deba hacer las expropiaciones por causa de utilidad pública; y finalmente, porque los hechos no constan con la debida claridad; pues aunque en el informe se habla de novecientos vecinos del nuevo municipio, parece probable que ese número corresponde al total de la jurisdicción, y no al caso de la nueva Villa, según se infiere del número de personas, relativamente pequeño, que suscriben la petición, y del dicho no desmentido de la propietaria.

Quinto: que de la hacienda de San Lorenzo, expropiada por el artículo 1º del decreto número 72, sólo un millón de varas cuadradas ha de ocupar la población, quedando el terreno sobrante como propiedad de una corporación, en abierta oposición con el artículo 25 de la ley de 21 de Junio de 1856.

Considerando, en cuanto al Reglamento del Ejecutivo: Primero: que siendo anticon-

stitucional la ley que reglamenta, carece de razón de ser.

Segundo: que no establece la indemnización previa, antes bien la aplaza para que se verifique por los mismos vecinos, en la forma designada en los artículos 13 y 14, lo cual es obra de tiempo, si se tiene en cuenta que el C. Gobernador asegura en su informe, que los vecinos de la nueva Villa son sumamente pobres.

Tercero: que los documentos número 8 y 9, acompañados por el C. Gobernador á título de justificantes, demuestran que de hecho la expropiación llegó á verificarse sin que antes hubiera precedido la indemnización; ni aún siquiera el avalúo de que habla el artículo 2º del decreto número 72.

Cuarto: que el final del artículo 3º, excluye del avalúo las fincas de los arrendatarios, y sin embargo las expropia por el artículo 7º, sin advertir que en el caso de suscitarse alguna cuestión sobre la propiedad de esas fincas y cercas que la Señora reputa suyas, la autoridad judicial es la única competente para decidirla con audiencia de parte y formalidades de un juicio.

Por tales fundamentos, y de conformidad con el pedimento fiscal, definitivamente juzgando, fallo: Primero: que la Justicia de la Union ampara y protege á la Sra. Doña Trinidad del Castillo de Fernandez, contra el decreto número 72, expedido por la H. Legislatura el 24 de Setiembre de 1873: Segundo: igualmente la ampara y protege contra el reglamento que para dicha ley dió el Ejecutivo el 4 de Octubre del mismo año. Notifíquese, y sacadas las copias de estilo, elévense estos autos al superior, en revisión.

El C. Lic. José Manuel Jáuregui, Juez interino de Distrito del Estado, así lo decretó, mandó y firmó. Doy fé.—*Lic. José Manuel Jáuregui.*—*José G. Aguirre,* secretario.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, 13 de Junio de 1874.—Visto el recurso de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Tamaulipas, por Doña Trinidad del Castillo de Fernandez, contra el decreto número 72 de la Legislatura del Estado de fecha 24 de Setiembre del año pasado, y su reglamento expedido por el Ejecutivo en 4 de Octubre del mismo año, que sin causa de utilidad pública y sin concederle previa indemnización, la expropiaron de una parte de los terrenos de la hacienda de San Lorenzo, con violación de la garantía que consigna el artículo 27 de la Constitución federal.

Considerando: que tanto el decreto número 72, como el reglamento del Ejecutivo del Estado, han omitido disponer que la indemnización por los terrenos que se han de ocupar por causa de utilidad pública, preceda al acto de la expropiación.

Que el artículo 27 de la Constitución federal, previene: que la propiedad de las personas, no puede ser ocupada sino previa indemnización.

Por estas consideraciones, y con fundamento de los artículos 101 y 102 de la misma Constitución, se decreta: que es de confirmarse y se confirma la sentencia pronunciada por el Juez de Distrito en 4 de Mayo del presente año, que declara: primero: que le Justicia de la Unión ampara y protege á la Sra Doña Trinidad del Castillo de Fernandez, contra el decreto número 72, expedido por la H. Legislatura del Estado de Tamaulipas, en 24 de Setiembre de 1873; segundo: igualmente la ampara y protege contra el reglamento que por dicha ley dió el Ejecutivo del Estado en 4 de Octubre del mismo año.

Devuélvanse los autos al Juzgado de su origen, con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decreta-

ron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José María Iglesias.*—*Miguel Auza.*—*José María Lozano.*—*José Arteaga.*—*Ignacio Ramírez.*—*Manuel de Castañeda y Nájera.*—*Ignacio M. Altamirano.*—*Simon Guzman.*—*Luis Velasquez.*—*M. Zavala.*—*Enrique Landa,* secretario.

Es copia que certifico. México, 31 de Agosto de 1874.—*Lic. Enrique Landa,* oficial mayor.

CRIMINAL.

Causa instruida en el Juzgado de Distrito de Michoacan, contra Albino Lopez, por circulacion de moneda falsa.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

Perfeccionado el sumario de esta causa instruida contra Albino Lopez por el delito de circulacion de moneda falsa, aparece plenamente comprobado este, por la propia confesion del acusado, administrada con el dicho de Faustino Hurtado y Antonio Carrillo.

Como aun cuando está probado el cuerpo del delito, no lo está el hecho de que Albino haya obrado de acuerdo con el autor de la falsificación, el caso de que se trata debe comprenderse en la segunda parte del art. 674 del Código penal; y por lo mismo, el Promotor formula en contra del responsable, el cargo que le resulta como circulador de moneda falsa en los términos que deja expresados, y pide se le imponga la pena de que habla el art. 422, á que se refiere el antes citado del Código penal.

Morelia, Abril 10 de 1874.—*N. Caballero.*

Es copia que certifico. Morelia, Abril 21 de 1874.—*Isidro Aleman.*